

SRA/2026



SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA
ARS 2026 / AMERICAN REGIONAL SECURITY REPORT

INFORME
Abril 2026



Universidad
de Navarra

© Abril 2026

Center for Global Affairs & Strategic Studies

Universidad de Navarra

Facultad de Derecho–Relaciones Internacionales

Campus Pamplona: 31009 Pamplona

Campus Madrid: Marquesado Sta. Marta 3, 28027 Madrid

<https://www.global-affairs.es>


SRA/2026



SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA *ARS 2026 / AMERICAN REGIONAL SECURITY REPORT*

INFORME
Abril 2026

‘Donroe’: Doctrina, mapa y ejecución

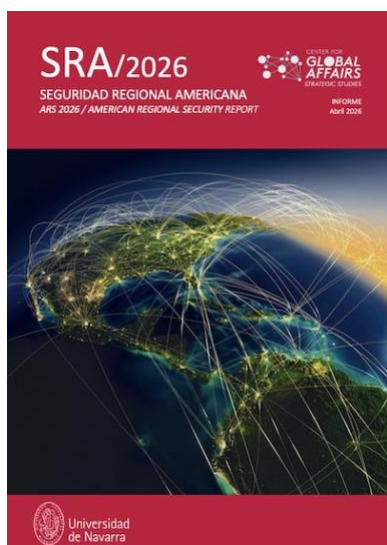
 El entorno americano de Estados Unidos se ha convertido oficialmente en prioridad geopolítica para Washington. Tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump comenzó a adoptar medidas de intervención en el vecindario geográfico de Estados Unidos. En noviembre fue publicada la Estrategia de Seguridad Nacional, que al proclamar el ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe establecía un marco doctrinal, de recobrado interés por el hemisferio occidental, que daba razón del despliegue militar en el Caribe, los ataques a las narcolanchas, la agresión a Venezuela y la detención de quien ejercía de pareja presidencial, el bloqueo petrolero a Cuba y también el deseo de incorporar dentro de Estados Unidos tanto Canadá como Groenlandia. Esa delimitación geográfica dibuja un mapa: el de la Gran Norteamérica, como lo ha denominado la Administración Trump, presentado como un perímetro de seguridad —del Polo Norte a la línea del ecuador— cuyo control, más o menos directo, reclama Washington.

Se trata de un cambio sísmico para la seguridad regional americana, de la que se ocupa este informe. Gran parte de lo sucedido en este ámbito en el último año tiene que ver justamente con esa actitud de la Administración Trump, que ha sido calificada de ‘imperial’. Además de lo que afecta a Groenlandia (definitivamente incorporada a la cartografía de Norteamérica), Canadá, Venezuela y Cuba, la mayor asertividad de EEUU en el norte del hemisferio occidental (el semihemisferio noroccidental) tiene implicaciones directas también para el resto de los países. Es el caso de Puerto Rico, que ha recobrado valor estratégico y tal vez tenga opciones de devenir en el estado número 51 de EEUU; de Haití, para el que Washington ha impulsado una Fuerza de Represión de las Bandas, en el marco de la ONU; y de Ecuador, que en su lucha contra el crimen organizado cuenta con el apoyo militar estadounidense.

Todo esto son componentes de la ‘Doctrina Donroe’, que China, contra la que especialmente se articula, ha querido contestar publicando su propio documento sobre su apuesta de cooperación con la región, aguantándole la mirada a Trump.

Emili J Blasco

Center for Global Affairs & Strategic Studies



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

La ambición imperial de Donald Trump: Gobernar un semishemisferio de la Tierra 5

GEOPOLÍTICA

La Gran Norteamérica: Un cuarto de esfera terrestre como ‘dominio’ de EEUU 8

EXTREMO NORTE

Groenlandia pasa de la periferia estratégica al centro de la disputa por el Ártico 11

ÚLTIMA FRONTERA

Canadá acelera el refuerzo militar en sus territorios árticos para apaciguar a Trump 15

PLATAFORMA CARIBEÑA

Puerto Rico recobra valor estratégico para EEUU por el despliegue en el Caribe 18

POTENCIA EXTRAHEMISFÉRICA

La Doctrina de China para América Latina: Pekín aguanta la mirada a Trump 21

SEGURIDAD PERSONAL

La ‘extracción’ de Maduro no libera a Venezuela del régimen autoritario 25

BANDAS ARMADAS

Haití avanza hacia elecciones en medio de violencia de pandillas que la ONU no logra atajar 29

FRONTERA CALIENTE

Noboa y Petro se acusan de la inseguridad en la frontera entre los dos países 32

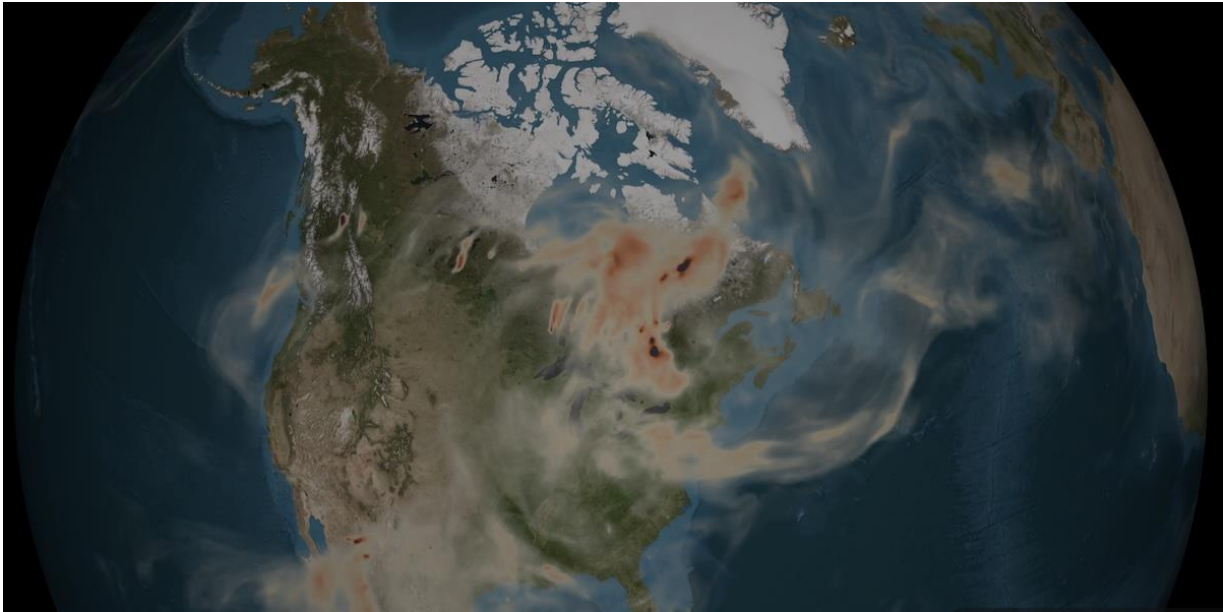


Imagen satelital de América del Norte que recoge el intenso humo de incendios en Canadá [NASA]

RESUMEN EJECUTIVO

La ambición imperial de Donald Trump: Gobernar un semihemisferio de la Tierra

Primero fueron los reclamos, en los primeros meses de presidencia —exigencia de retomar el control del Canal de Panamá, propuesta de adquirir Groenlandia, deseo de incorporar Canadá...—, y luego llegó la doctrina: el Corolario Trump de la Doctrina Monroe, expresado en los documentos estratégicos de seguridad y de defensa nacional publicados en noviembre de 2025 y enero de 2026, respectivamente. Finalmente, el pasado mes de marzo todo eso se visualizó en un mapa: el de la Gran Norteamérica. El ‘América para los americanos’ de la ‘Doctrina Donroe’ se concreta en un anhelo de control, más o menos directo, de la mitad norte del hemisferio occidental: el semihemisferio noroccidental. El mapa no cuenta con una versión gráfica oficial (su plasticidad revelaría una pulsión imperial para la que aún parece haber cierto pudor), pero la Administración Trump ha comenzado a hablar de un “perímetro de seguridad” que resulta vital

para sus intereses nacionales que va “desde Groenlandia hasta Ecuador, desde Alaska hasta Guyana” (cabría decir que desde el Polo Norte a la línea del ecuador y desde las islas Hawái a la proximidad de las Azores).

La ofensiva de Trump en relación con Groenlandia ha aminorado, pero no la importancia de esta inmensa isla para Estados Unidos. El creciente deshielo del Ártico sitúa en ese extremo norte del globo una de las eventuales futuras disputas entre grandes potencias. Washington es consciente de que debe impedir que Rusia y China extiendan allí su presencia y, desde luego, tengan acceso a Groenlandia: quien disponga de ese territorio puede usarlo a manera de portaviones contra los otros. La presión estadounidense de los últimos años ha logrado que algunas iniciativas chinas de construcción de infraestructuras no prosperaran, pero la partida, que también afecta a los recursos naturales encerrados en el subsuelo, aún está por jugar.

Canadá tiene en cierto modo la desdicha de encontrarse entre Estados Unidos y el Ártico: queda encajada entre el paralelo 49 de la larga frontera estadounidense, Alaska y Groenlandia; pero mientras las soberanías se mantengan —y así será en el tiempo previsible— esto también le permite jugar sus cartas: Washington le necesita para que priorice la seguridad en ese Alto Norte. Así, para apaciguar a Trump, Ottawa ha acelerado el refuerzo militar en sus territorios árticos, con un plan para modernizar sus bases militares y las infraestructuras viarias. Además, Canadá ha agilizado el pacto con EEUU y Finlandia para aumentar la flota de rompehielos. No ayudan los memes de Trump en redes sociales, tratando al primer ministro de ‘gobernador’, como si estuviera al frente de un estado más de la Unión, pero la realidad geopolítica obliga a los canadienses a tener que soportar cierta altanería de sus vecinos.

Si la mirada ‘imperial’ hacia el norte ha quedado de momento en meras intenciones, la dirigida hacia el sur ha contado con un amplio despliegue militar en aguas del Caribe. Con ello, Puerto Rico ha recobrado un valor estratégico que la distensión de las últimas décadas le habían restado, llevando a pensar que llegaría un momento en que Washington podría desprenderse del todo de una isla que le cuesta dinero. Puerto Rico ha pasado a constituir de nuevo una conveniente plataforma para actuaciones como la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico y la presión sobre Venezuela o Cuba. Con ese fin, EEUU ha reactivado parcialmente la base de Roosevelt Roads, inactiva desde el fin de la Guerra Fría. Esa utilidad de la isla puede impulsar la aceptación de Washington de acomodar el deseo de ‘estadidad’ puertorriqueño (convertirse en el estado 51 de EEUU), según confían sus defensores, pero el poco aprecio previamente mostrado por Trump hacia Puerto Rico, el escaso tacto de la ‘Doctrina Donroe’ para con el entorno vecinal y el sentimiento pacifista de parte de la población también pueden acentuar el querer marcar cierta distancia o incluso empujar hacia la independencia.

Cuando Estados Unidos afirma su interés prioritario en garantizarse una amplia base geográfica lo hace especialmente frente a China.

Quiere asegurarse directamente de que Pekín no tendrá influencia en la Gran Norteamérica y de que en la otra mitad del hemisferio occidental, la que queda al sur del ecuador, sus aliados contribuirán a mantenerla bajo mínimos. Pero China ha dado a entender que le aguanta la mirada al presidente estadounidense: pocos días después de que Washington oficializara el Corolario Trump, Pekín publicó su propio documento para intensificar su relación con Latinoamérica. La movilización de Washington contra infraestructuras gestionadas por empresas chinas no ha inducido a Xi Jinping a ningún plan de desinversión o retirada. China presiona a sus socios comerciales latinoamericanos para que no se alineen con Taiwán ante la perspectiva de un conflicto por esa isla y no se dejen ganar por la ambigüedad estratégica de EEUU respecto a ella. Frente a la unilateralidad que la ‘Doctrina Donroe’ impone a sus vecinos, China refuerza su apuesta por la cooperación y los foros multilaterales.

No hay mayor exponente de la presidencia ‘imperial’ de Trump que la arriesgada operación para apresar a Nicolás Maduro y ponerlo a disposición de la Justicia en EEUU, y lo mismo cabe decir de su interés en tomar control de la producción petrolera venezolana, así como de su aparente despreocupación por una acelerada transición democrática. En realidad, la ‘extracción’ de Maduro no ha liberado a Venezuela de un régimen autoritario que se sostiene a pesar de haber perdido con contundencia las últimas elecciones. De momento, el único paso sustancial ha sido la aprobación de la Ley de Amnistía, pero esta no ha cumplido las expectativas generadas entre la mayor parte de la población. Un análisis de la norma para la liberación de presos políticos permite concluir que no ha sido más que un instrumento de gestión política de carácter discrecional. El gobierno ha dado por concluido el proceso de excarcelaciones, pero diversas organizaciones siguen difundiendo listas de personas aún en prisión (Foro Penal habla de unas 450). La maquinaria represiva persiste en el país: gran parte de la arquitectura legal y orgánica del modelo precedente permanece de momento inalterada.

En el Caribe se perpetúa un problema que ninguna presidencia estadounidense ha logrado encauzar: Haití como estado fallido. La Administración Trump, proclive a soluciones de mayor uso de la fuerza, impulsó en septiembre de 2025 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una nueva iniciativa internacional, con un carácter no ya de ‘misión de paz’, como las malogradas intervenciones anteriores de la ONU, sino de combate directo de las pandillas criminales que se han adueñado del país, bautizada como Fuerza de Represión de las Bandas. Con todo, no se trata de una intervención directa estadounidense y sus perspectivas de éxito no son altas; su primer cometido es crear suficientes condiciones para la celebración a lo largo de este año de elecciones presidenciales y la formación de nuevo gobierno.

Ecuador se sitúa en el límite sur del perímetro de seguridad de la Gran Norteamérica proclamada por la Administración Trump y muestra de esa consideración es la colaboración militar que Washington está prestando (participación de asesores sobre el terreno,

suministro de medios e información) al gobierno de Daniel Noboa en su guerra contra el crimen organizado, el cual está muy vinculado a las rutas de la cocaína colombiana que atraviesan la frontera y buscan la salida por puertos ecuatorianos. A pesar de esos esfuerzos y los continuos toques de queda, la tasa de homicidios volvió a registrar otro récord en 2025. En los últimos meses, Noboa ha acusado al presidente colombiano, Gustavo Petro, de descuidar la seguridad de su frontera, mientras que Petro ha denunciado que el Ejército ecuatoriano ha bombardeado territorio colombiano. Ese cruce de declaraciones ha ido acompañado de medidas económicas: Noboa ha ido incrementando los aranceles a la importación de productos colombianos, hasta llegar al 100%, y Petro ha respondido cada vez en la misma medida e incluso suspendiendo el envío de electricidad a Ecuador, deficitario en producción eléctrica. Por primera vez, dos países latinoamericanos han entrado en una guerra de aranceles, simbolizando la era que la Administración Trump ha traído a la región. ●

La Gran Norteamérica: Un cuarto de esfera terrestre como ‘dominio’ de EEUU

La Administración Trump demarca el perímetro de seguridad estadounidense: “desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana”

° La ‘Doctrina Donroe’ ya tiene su mapa, aunque no hay una versión gráfica oficial: su plasticidad revelaría una pulsión imperial para la que aún parece haber cierto pudor.

° Del Gran Caribe del Corolario Roosevelt se pasa a la Gran América del Norte del Corolario Trump: un mismo propósito en un territorio extendido hacia el norte y el sur.

° El Departamento de Guerra dice tener intención de encargarse de la seguridad hasta el ecuador; con los países situados más allá habrá alianzas para “distribuir la carga”.

EMILI J. BLASCO

El calificativo de ‘imperial’ que en ocasiones se utiliza para la segunda presidencia de Donald Trump responde no solo a un estilo de gobierno, sino también a una actitud hacia los países vecinos y sus territorios. Ya antes Trump había hablado de adquirir Groenlandia y apuntado la conveniencia de recuperar el Canal de Panamá, pero desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 no ha dejado de mostrar un interés de dominio geográfico sobre el espacio que circunda a Estados Unidos.

En algunos embates ha preferido no ir más lejos, como en la amenaza de invadir Groenlandia o la ‘invitación’ a Canadá a integrarse en EEUU; en otros ha logrado algunos avances mediante presiones, como la expulsión del gestor chino de las terminales portuarias de las dos bocas del Canal, y en otros ha decidido jugar con fuerza sus cartas, como el despliegue del Comando Sur en el Caribe, la agresión militar de Venezuela y detención de Maduro y el bloqueo naval de Cuba.

Esas acciones han ido acompañadas de una doctrina que las explica. Los documentos estratégicos de seguridad y de defensa publicados en noviembre de 2025 y enero de 2026 han [invocado](#) la Doctrina Monroe y bautizado como ‘Corolario Trump’ la especificación que de ella hace la presente

Administración. Pero a esa formulación le faltaba un mapa, y este lo describió en sus parámetros el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 5 de marzo en una [intervención](#) ante autoridades de defensa hemisféricas (Conferencia de las Américas sobre la lucha contra los carteles):

“La respuesta a nuestro desafío no reside en ignorar nuestra geografía en nombre de los intereses globales, sino en aceptar nuestra geografía compartida en nombre de los intereses nacionales. Por eso, el presidente Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico que abarca desde Groenlandia hasta el Golfo de América, el Canal de Panamá y los países circundantes.

En el Departamento de Guerra, denominamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque cada nación y territorio soberano al norte del ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no forma parte del ‘Sur Global’. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en esta gran región en la que todos vivimos. Cada uno de estos países limita con el Atlántico Norte o el Pacífico Norte.

Cada uno de estos países se encuentra al norte de las dos barreras geográficas básicas de esta región: la Amazonía y la Cordillera de los Andes. Se trata de geografía básica que no se

enseña en las escuelas con la frecuencia necesaria. Y restablece nuestras relaciones Norte-Sur, y debemos hacerlo bien. En el Norte, Estados Unidos debe reforzar su postura y presencia, en cooperación con ustedes y nuestros socios soberanos, para defender nuestro perímetro de seguridad inmediato compartido.

En el Sur, es decir, al sur del ecuador, al otro lado de esta gran vecindad, fortaleceremos las alianzas mediante una mayor distribución de la carga. Esto les permitirá asumir un papel más importante en la defensa del Atlántico Sur y el Pacífico Sur, y en la protección de infraestructuras y recursos críticos en colaboración con nosotros y otras naciones occidentales.

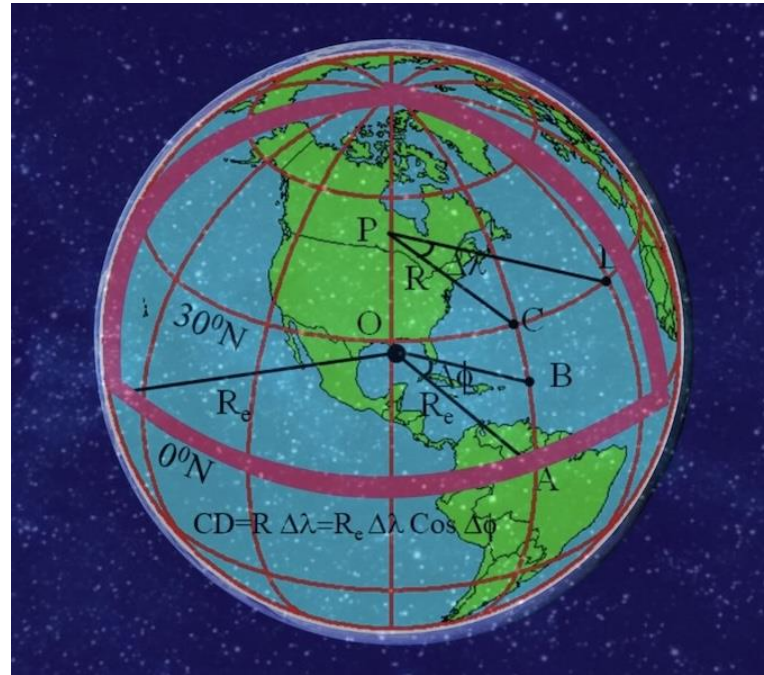
Esto es lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial, al igual que hundimos barcos con torpedos. En el Departamento de Guerra, lo llamamos defensa del ‘cuarto de esfera’, y lo haremos de nuevo. Si nos tomamos en serio nuestra seguridad nacional y si priorizamos la geografía, no podemos seguir como hasta ahora. Esto significa que, para cada país de este hemisferio, la seguridad fronteriza debe ser su máxima prioridad”.

La ‘Doctrina Donroe’, pues, tiene su mapa, el de la ‘Gran Norteamérica’, como el Departamento de Guerra ha bautizado el ámbito de más estrecha aplicación de esa doctrina. Sin embargo, no hay una versión gráfica oficial: su plasticidad revelaría una pulsión imperial para la que aún parece haber cierto pudor.

Cuando a una geografía se le antepone el adjetivo ‘gran’ se suele significar un espacio que excede las dimensiones del término original: unas veces sirve de mero descriptor de una región natural que sobrepasa fronteras en realidad forzadas, y otras tiene un propósito ideológicamente programático (nacionalista, imperialista o irredentista).

El ‘gran’ antepuesto

En Estados Unidos se ha hablado a veces del Gran Caribe para indicar el conjunto marítimo que engloba el mar Caribe y el Golfo de México, remarcando que a la gran potencia norteamericana le incumbe muy directamente lo



El cuarto de esfera, del Polo Norte a la línea del ecuador y de Hawái a la proximidad de las Azores y Cabo Verde

que ocurre al sur de su litoral. De esta forma, históricamente, el Caribe pasó a ser un lago estadounidense y Estados Unidos su gendarme.

Esto ocurrió cuando la Doctrina Monroe (1823), inicialmente defensiva pues reclamaba a las potencias europeas ‘respeto’ para todo un hemisferio occidental recién independizado en múltiples repúblicas, dejó de lado su panamericanismo continental y pasó a ser ofensiva. Ahí la doctrina fue remasterizada como Corolario Roosevelt (1904) y convirtió el Gran Caribe en el ‘patio trasero’ de Estados Unidos. Hoy, el Corolario Trump (2025) pretende extender a la Gran Norteamérica, un área mucho mayor, el ámbito de ‘dominio’ estadounidense.

En realidad, el proceso tiene algo de acordeón: en el siglo que media entre los dos corolarios, Washington intervino en todo el hemisferio (fue la Doctrina de Seguridad Nacional, con la que auspició golpes de estado o influyó a través de dictaduras militares), en el marco de la lucha global contra el comunismo de la Guerra Fría. Con la certeza ahora de que Rusia ya no es una amenaza planetaria, EEUU se repliega estratégicamente: pero ahora la plataforma ya no es el Gran Caribe, que le sirvió de trampolín en su crecimiento como potencia mundial, sino la Gran América del Norte, que

debe servirle para garantizarse una base de suministros y de seguridad frente a China, su nuevo rival, en un mundo de globalización fragmentada.

¿Diseño o improvisación?

No está claro cuánto de la acción de Donald Trump sigue realmente un diseño y cuánto es mera improvisación. La guerra contra Irán, por ejemplo, no aparece en la Estrategia de Defensa Nacional, en la que Oriente Medio perdía significancia, y va en sentido contrario al atrincheramiento en el hemisferio occidental que la ‘Doctrina Donroe’ predicaba. Más bien hay que pensar que los documentos estratégicos de la Administración Trump son un intento de poner orden y dirección a planteamientos de hecho menos disciplinados; incluso su elaboración podría ser un cometido que Trump deja a aquellos asesores más ideologizados para que se autorrealicen, sin que él dé valor a las formulaciones resultantes.

De todos modos, basta el deseo expresado por Trump de controlar Groenlandia, su advertencia de que puede traspasar la frontera de México para perseguir a los carteles de droga, su desconsideración hacia el sentimiento nacional de Canadá y su jactada intención de [hacerse con Cuba](#), además de los ataques realizados contra narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico y haber dispuesto a la fuerza del petróleo de

Venezuela para entender que el mapa en cuestión —del Polo Norte a la línea del ecuador (y podría añadirse que de las islas Hawái hasta la proximidad de las Azores y Cabo Verde)— es percibido por esta Administración como área de dominio de Estados Unidos, al menos de un control relativamente directo. Esa demarcación (un cuarto de esfera terrestre, el semihemisferio noroccidental) ha sido presentada como el ‘perímetro de seguridad’ de EEUU, pero responde más bien a un planteamiento de ‘derecho de injerencia’.

El propio Hegseth distingue entre los países al norte del ecuador, que están más condicionados a mantener una colaboración con Estados Unidos en los términos que este plantea, y los que se ubican al sur, con los cuales bastarán “alianzas”. Da a entender que en el norte EEUU tiene intención de encargarse directamente de la seguridad, lo que en última instancia convierte ese vasto espacio en una suerte de protectorado, mientras que en el sur habrá una mayor “distribución de la carga” en materia de seguridad. En este contexto, Trump reunió en marzo en Miami a una docena de presidentes latinoamericanos para poner en marcha el Escudo de las Américas, un acuerdo de cooperación militar con el que la Casa Blanca pretende hacer avanzar sus intereses estratégicos en la región. ●

Groenlandia pasa de la periferia estratégica al centro de la disputa por el Ártico

El intento de anexión de Trump muestra el vital interés de EEUU por controlar la gran isla e impedir que Rusia o China ganen influencia en ella

° Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha insistido públicamente en su deseo de tomar Groenlandia, incluso mediante el envío de tropas.

° En los últimos meses, el presidente estadounidense ha rebajado su tono y ha descartado una invasión, pero el debate ha dañado la cohesión de la OTAN.

° Las autoridades danesas y la presión de Washington han bloqueado varios proyectos de China en la isla, pero Pekín –como Moscú– mantienen su ambición ártica.

ANDREA MARSCH

Groenlandia ha adquirido una posición central en la arena geopolítica, pasando de ser una periferia estratégica a desempeñar un papel fundamental en la geopolítica global. El acelerado cambio climático ha facilitado el acceso a recursos naturales cruciales y ha abierto nuevas rutas marítimas, lo que incrementa la importancia militar de la gran isla. Como resultado, Groenlandia se ha convertido en un área de gran interés que intensifica la competencia entre las principales potencias.

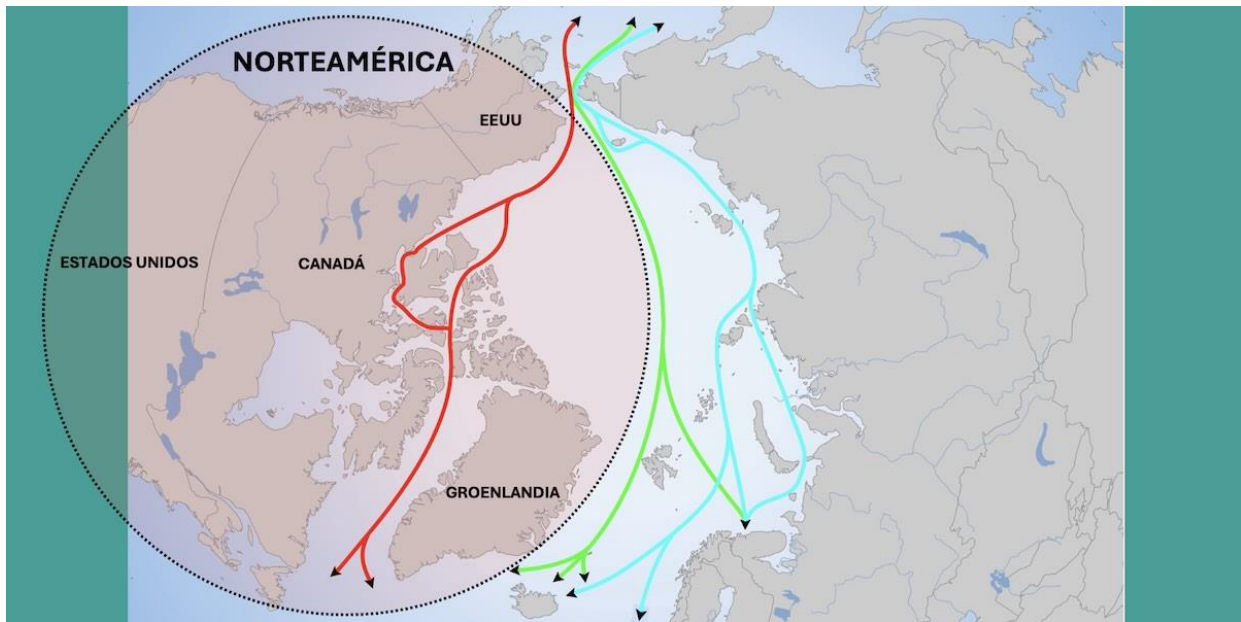
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha [insistido](#) públicamente en su intento de anexionarse Groenlandia, lo que ha fracturado el sosegado consenso occidental que había gestionado la competencia entre grandes potencias en el Ártico con relativa estabilidad. Al tratar a Groenlandia como un activo transaccional en lugar de un territorio aliado, Estados Unidos corre el riesgo de acelerar precisamente la dinámica que pretende contener: la penetración económica china, la creciente influencia militar rusa y una deriva hacia la autonomía groenlandesa que privaría a Occidente de su puesto de avanzada ártico más estratégico. El riesgo más acuciante no es la confrontación directa por Groenlandia, sino una erosión gradual de la cohesión de la OTAN en el Alto Norte, que Pekín y Moscú querrán aprovechar.

Diversos actores compiten por el dominio en la región. Por un lado, Estados Unidos busca consolidar su presencia estratégica en la isla para preservar su dominio en el Ártico y asegurar cadenas de suministro críticas, en particular de elementos de tierras raras. China, por su parte, ha [impulsado](#) una estrategia de penetración económica mediante la inversión en infraestructura, la adquisición de recursos y su iniciativa más amplia de la [Ruta Polar de la Seda](#). Al mismo tiempo, Rusia continúa expandiendo su presencia militar en el Ártico, reforzando su capacidad de disuasión estratégica y desafiando la influencia occidental en la región.

Estas ambiciones superpuestas transforman el panorama geopolítico del Ártico. La posición geográfica de Groenlandia, su potencial de recursos y su cambiante estatus político la sitúan en la encrucijada de dinámicas de seguridad, económicas y ambientales. El resultado es una región ártica más competitiva y potencialmente inestable, donde la cooperación se ve cada vez más comprometida.

Importancia estratégica

Groenlandia ocupa una posición estratégica única entre Norteamérica, Europa y el Ártico, lo que la convierte en un punto crítico para la vigilancia militar, la defensa antimisiles y el control marítimo. Su proximidad a las rutas marítimas emergentes del Ártico, incluidas las



Rutas del Ártico. Rojo: pasaje del noroeste; azul: ruta del Mar del Norte; verde: ruta marítima transpolar. [Mapa de The Arctic Institute, al que se han añadido las referencias a Norteamérica]

conectadas con la Ruta Marítima del Norte, aumenta su relevancia geopolítica a medida que la navegación polar se vuelve más viable.

La transformación del Ártico, de una periferia helada a un escenario geopolítico activo, está impulsada por una variable irreversible: la aceleración del cambio climático. A medida que los casquetes polares retroceden, la importancia estratégica de Groenlandia se incrementa simultáneamente en tres ejes.

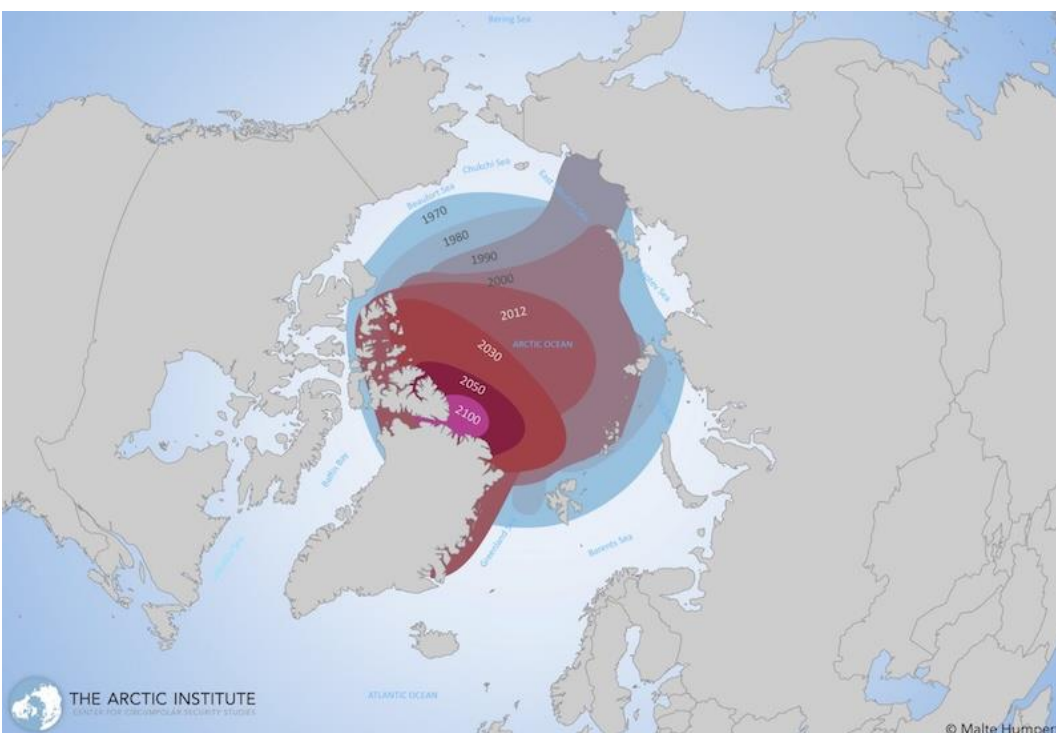
En primer lugar, los yacimientos de elementos de [tierras raras](#), uranio y minerales críticos, antes inaccesibles, comienzan a estar idealmente en el punto de mira de la explotación. Si bien aún persisten dudas sobre su viabilidad financiera, su consideración ofrece una oportunidad para contrarrestar la [dependencia estructural](#) de Occidente respecto a China en lo que respecta a las cadenas de suministro de tierras raras, esenciales para la fabricación de material de defensa y los sectores de tecnología avanzada. En segundo lugar, el retroceso del hielo ártico está ampliando la navegabilidad de los corredores marítimos del Ártico, con el potencial de reconfigurar los patrones comerciales mundiales y elevar la posición de Groenlandia en las rutas emergentes entre Europa, Asia y América del Norte. En tercer lugar, la posición geográfica de Groenlandia entre el Atlántico Norte y el Océano Ártico la

hace indispensable para los sistemas de alerta temprana de misiles, la vigilancia espacial y la libertad de operaciones navales, funciones que actualmente se desarrollan en la Base Espacial de Pituffik (anteriormente Base Aérea de Thule), cuyo fundamento jurídico bilateral se basa en un acuerdo de 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca.

Ninguna de estas dinámicas es completamente nueva. Lo que sí es estructuralmente nuevo es su simultaneidad: la accesibilidad a los recursos, la viabilidad marítima y la relevancia militar se intensifican al mismo tiempo que los mecanismos institucionales diseñados para gestionar la rivalidad en el Ártico, como es el caso del Consejo Ártico, han quedado prácticamente paralizados desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. El resultado es una competencia creciente e intensificada sin un marco diplomático funcional que la contenga.

Competencia entre potencias

Antes de la renovada campaña de Trump sobre Groenlandia, la competencia entre las grandes potencias en el Ártico ya se había intensificado. Estados Unidos [mantenía](#) la primacía estratégica a través de Pituffik y bloqueaba activamente las inversiones chinas en infraestructura en la isla por motivos de seguridad nacional, incluyendo la



Previsión del progresivo deshielo del Ártico [The Arctic Institute]

oposición a los proyectos de expansión aeroportuaria financiados por China y la injerencia en proyectos mineros.

China se ha declarado un [‘estado cercano al Ártico’](#) y ha [impulsado](#) una estrategia de penetración económica gradual a través de su iniciativa de la Ruta Polar de la Seda, una extensión ártica de la Franja y la Ruta. Busca financiar la expansión de aeropuertos y adquirir participaciones en proyectos de tierras raras como Kvanefjeld, además de ampliar las expediciones de su flota de rompehielos. Estos esfuerzos están estrechamente ligados al objetivo más amplio de China de asegurar el acceso a minerales críticos y reducir las vulnerabilidades en sus cadenas de suministro. Sin embargo, muchas de estas iniciativas han sido [bloqueadas](#) o limitadas por las autoridades danesas y la influencia estadounidense, lo que refleja la creciente preocupación por la dependencia estratégica y los riesgos para la seguridad.

El enfoque de China puede caracterizarse como de paciencia estratégica, que combina el compromiso económico con ambiciones geopolíticas a largo plazo. Rusia, por otro lado, ha expandido su presencia militar en el Ártico mediante la modernización de su Flota del Norte, el despliegue de sistemas de misiles avanzados y

la expansión de bases árticas en su territorio, lo que refuerza sus capacidades de disuasión nuclear y estratégica sin llegar a la confrontación directa.

EEUU: Seguridad, disuasión y control

Para Estados Unidos, Groenlandia es un pilar fundamental de su estrategia de seguridad en el Ártico. Su objetivo principal es mantener el dominio estratégico en el Ártico, garantizando capacidades de alerta temprana, cobertura de defensa antimisiles y libertad de operaciones en la región. La

modernización de la Base Espacial de Pituffik refleja esta prioridad. La base desempeña un papel vital en la detección de misiles balísticos y la vigilancia espacial, lo que la hace indispensable para los sistemas de defensa de EEUU y la OTAN.

Washington también ha tomado medidas para limitar la influencia de actores externos, en particular China. Las autoridades estadounidenses se han opuesto activamente a las inversiones chinas en infraestructura groenlandesa, incluyendo la construcción de aeropuertos y proyectos mineros, alegando motivos de seguridad nacional. La propuesta de Donald Trump en 2019 de comprar Groenlandia, si bien fue ampliamente criticada, puso de relieve el valor estratégico que Washington otorga a la isla. En términos más generales, Groenlandia funciona como zona de amortiguación dentro del flanco norte de la OTAN, lo que refuerza la seguridad transatlántica y disuade a posibles adversarios.

El discurso de Trump, reactivado en 2025, agrade a un territorio aliado mediante una retórica coercitiva. Por más que luego ha [descartado](#) una invasión, su desconsideración hacia los groenlandeses podría resultar contraproducente y convertirse en una ventaja

diplomática. China puede ahora posicionarse con credibilidad como un socio respetuoso de la autodeterminación de Groenlandia, en contraste con unos Estados Unidos prepotentes, mientras que Rusia puede citar el desorden interno de la Alianza como prueba de la fragilidad estructural de la cohesión de la OTAN. Más concretamente, la presión estadounidense ha exacerbado la opinión pública groenlandesa y danesa, lo que podría elevar el costo político de la cooperación en materia de seguridad.

Implicaciones para la gobernanza global

El flanco norte de la OTAN depende fundamentalmente de la soberanía danesa sobre un territorio frente a las presiones simultáneas que emanan actualmente de Washington, Pekín y Moscú. Históricamente, Dinamarca ha gestionado esta asimetría a través de instituciones multilaterales. Singularmente, el Consejo Ártico ha constituido un foro para la gobernanza de la región. Este mecanismo se ha suspendido de facto desde que los siete miembros occidentales del Consejo interrumpieron la cooperación con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022 ordenada por el presidente Putin. El mecanismo diplomático que antaño atenuaba la rivalidad en el Ártico ya no funciona, y por el momento no ha surgido ninguna institución equivalente que lo reemplace.

Nuuk ha aprovechado sistemáticamente el interés externo en su riqueza de recursos para impulsar la causa de una mayor autonomía respecto a Copenhague, y su movimiento independentista cuenta con un considerable apoyo interno.

La presión de Trump podría acelerar ese proceso. Los responsables políticos groenlandeses podrían inclinarse por utilizar su valor estratégico como palanca para atraer a diversos socios externos y reducir la dependencia de una sola potencia, lo que introduciría vulnerabilidades significativas y en gran medida impredecibles en la arquitectura del Ártico occidental, que ya se encuentra bajo una situación de presión.

Escenarios plausibles

Un escenario plausible es el de una escalada gradual en la que ningún actor cambia de rumbo. China amplía su compromiso económico a través de intermediarios y Rusia aumenta sus despliegues militares en el Ártico. La competencia entre EEUU, China y Rusia se intensifica. La parálisis del Consejo Ártico se convierte en un problema estructural en lugar de un desafío temporal.

Un resultado más estable sigue siendo posible si Estados Unidos trabaja en la gestión de alianzas, retomando un marco bilateral con Dinamarca, reforzando así la presencia de la OTAN en el Ártico para disuadir la escalada rusa. Groenlandia desarrolla gradualmente su sector minero crítico bajo la supervisión occidental y se preserva una relativa estabilidad.

Por otro lado, existe la posibilidad de que Groenlandia desarrolle un deseo de independencia, al tiempo que carece de la capacidad institucional y financiera para gestionar las presiones internacionales actuales. Groenlandia se enfrentaría a una competencia inmediata, en términos de alineamiento, con todos los principales actores del Ártico. La presión de Trump, destinada a consolidar el control estadounidense, podría ser el factor con mayor probabilidad de generar el resultado menos favorable para la coherencia estratégica occidental.

Si Washington va más allá de la presión retórica para ejercer un control de facto sobre Groenlandia, ya sea mediante presencia militar directa, coerción económica en Copenhague o declaraciones unilaterales de seguridad, dañaría gravemente la credibilidad occidental, en gran medida de forma irreversible. Esto fracturaría el flanco norte de la alianza.

El principal riesgo estratégico en juego es el deterioro de las condiciones que garantizan una estrategia occidental duradera en el Ártico. Las crecientes capacidades de China en el Ártico y el continuo rearme militar de Rusia en el Ártico son presiones estructurales a largo plazo que Occidente solo puede gestionar de forma colectiva. ●

Canadá acelera el refuerzo militar en sus territorios árticos para apaciguar a Trump

Ottawa reacciona para neutralizar la ‘invitación’ de la Casa Blanca a convertirse en la estrella número 51 de la bandera de Estados Unidos

° A comienzos de 2026 Canadá anunció un plan para modernizar sus bases militares y las infraestructuras viarias en su Alto Norte.

° El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha agilizado el pacto con Estados Unidos y Finlandia para aumentar la flota de rompehielos.

° Trump ha tratado al premier canadiense como si fuera un gobernador más de EEUU y ha publicado memes con la bandera estadounidense cubriendo ambos países.

NAIA VELASCO

Como es habitual en su estilo negociador, el presidente Donald Trump fija objetivos máximos para obtener resultados más modestos. Sus amenazas de comprar u ocupar militarmente Groenlandia, así como de incorporar Canadá como el estado número 51 de la Unión, no se materializarán. El desenlace pasará por una mayor cooperación militar, sin pérdida de soberanía de los países afectados. Así, Trump ha logrado que, en el caso de Canadá, el gobierno de Ottawa haya priorizado su postura defensiva en el norte, transitando de planes a largo plazo a medidas concretas e inmediatas.

Trump ya tuvo en su primer mandato algún momento de desconsideración hacia la personalidad nacional de Canadá, pero en su retorno a la Casa Blanca, tanto en la campaña electoral como una vez comenzada la presidencia el 20 de enero de 2025, insistió en la conveniencia de que el vecino país se integrara en Estados Unidos. Trató de ‘gobernador’ al entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como si su país fuera un estado más de EEUU, y utilizó [memes](#) en redes sociales donde la bandera estadounidense cubría también Canadá.

Estaba claro que Trump no podía avanzar en ese propósito y que muchas de sus declaraciones solo buscaban haber rabiar a los dirigentes canadienses. Pero en última instancia había un

diseño para hacer frente al deshielo del Ártico y los riesgos geopolíticos que este supone, de forma que la Administración Trump empujó la relación con Canadá al ámbito de la ‘securitización’, como también hizo con Groenlandia.

Desde su primer mandato, Trump criticó la escasa inversión canadiense en defensa y la consiguiente incapacidad de proteger su territorio septentrional, presentándola como un problema de seguridad para Estados Unidos y para el orden internacional. En la Cumbre de la OTAN de 2019, instó a Canadá a aumentar su [gasto en defensa](#) preguntando entonces si algún día destinaría el 2% de su PIB a ese fin. Canadá respondió elevando el gasto al 1,4% en 2020, pero luego ese porcentaje se relajó durante la presidencia de Joe Biden, bajando al 1,2% en 2022, según [datos](#) del Banco Mundial. Con el regreso de Trump, Canadá ha acelerado la materialización de dos iniciativas árticas, el ‘Icebreaker Collaboration Effort Pact’ (ICE Pact) y la estrategia ‘Our North, Strong and Free’.

Iniciativas canadienses

El ICE Pact, firmado junto con Finlandia y Estados Unidos, busca ampliar la flota polar mediante nuevo equipamiento y una producción más ágil. Para ello, establece un sistema de intercambio de información sobre los [rompehielos](#) de modo que las sucesivas



Rompehielos canadiense [Gov. de Canadá]

construcciones sean eficientes en tiempo y coste. Los rompehielos son activos fundamentales para preservar la soberanía y defensa canadiense en el norte, ya que permiten tanto rutas comerciales seguras como patrullas militares de vigilancia.

Sin embargo, el acuerdo aún no se ha traducido en un aumento real de la flota canadiense, que sigue contando con 18 rompehielos, aunque se prevé la [incorporación](#) de dos nuevas unidades antes de 2030. Ahora bien, incluso con esas adiciones, Rusia [triplica](#) en número esta flota, lo que otorga mayor fundamento a las críticas de Trump sobre la incapacidad defensiva de Ottawa (Estados Unidos solo tiene dos).

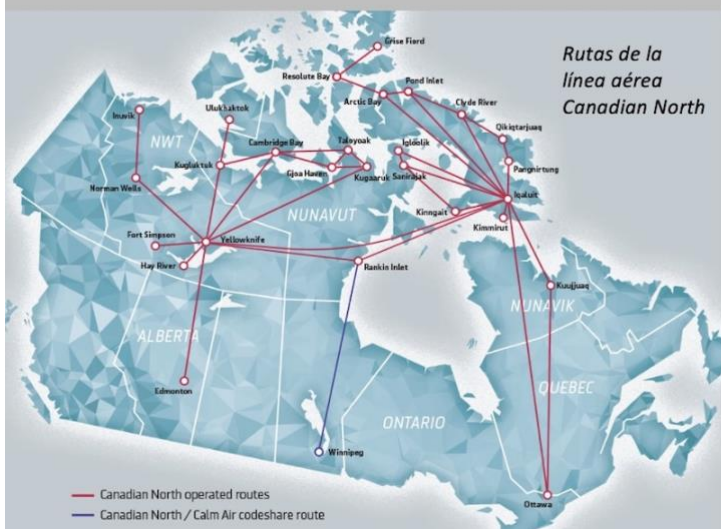
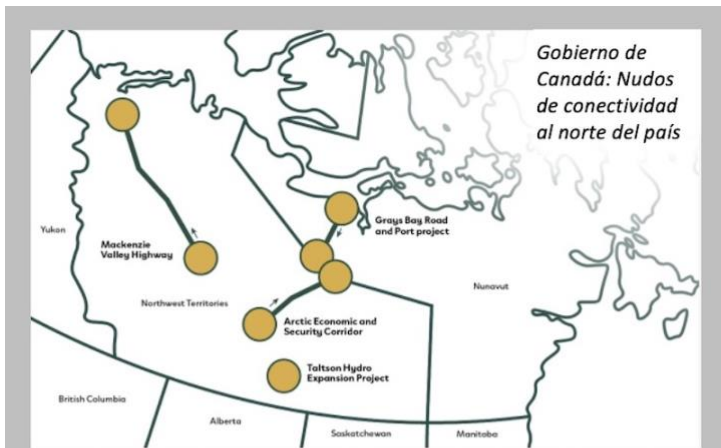
‘Our North, Strong and Free’ [aborda](#) de forma más directa el refuerzo de la defensa ártica mediante un presupuesto multimillonario que incluye sensores marítimos especializados y la construcción de una nueva estación terrestre satelital en la región. La estrategia recoge, además, el compromiso explícito de alcanzar el 2% del PIB en defensa. No obstante, su horizonte de implementación es de veinte años, un plazo que puede resultar excesivo ante el interés de Washington por reforzar la defensa ártica con inmediatez, como ha quedado patente con el caso de Groenlandia.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, quien sustituyó a Trudeau en marzo de 2025, ha

combinado esa mayor asertividad en el Ártico con el esfuerzo por no quedar únicamente ligado a Estados Unidos. Uno de sus gestos diplomáticos más significativos fue su [visita](#) a China a comienzos del 2026, la primera que realizaba el titular del Gobierno canadiense en casi diez años. Aunque en sus encuentros con el presidente Xi Jinping y otras autoridades chinas no se abordaron asuntos de defensa ni del Ártico, el viaje constituyó un mensaje político nítido: un movimiento extraordinario en un contexto de desconfianza parcial de Trump acerca de las capacidades canadienses. Lejos de resultar contradictorio, este acercamiento encaja con la [política ártica](#) canadiense de 2024, que defiende la cooperación con China cuando los intereses convergen y el enfrentamiento cuando divergen.

En esa misma línea diplomática, el pasado 6 de febrero Canadá inauguró su [consulado](#) en Groenlandia que hasta entonces sólo contaba con representación de Islandia y Estados Unidos. Resulta sorprendente que este paso no se hubiera dado antes, dada la estrecha vinculación entre el Ártico canadiense y Groenlandia. En cualquier caso, el gesto reafirma el interés canadiense en la región, su voluntad de tejer alianzas con otros países árticos y el respeto a la soberanía groenlandesa.

Junto a esa actividad diplomática, en marzo Carney [anunció](#) un “ambicioso plan para



defender, construir y transformar el Norte”. Según dijo Carney, “Canadá no puede depender de otro país para su seguridad y prosperidad (...) Con esta ambiciosa nueva estrategia, Canadá está tomando las riendas de su futuro y construyendo un país más fuerte e independiente”.

Este plan va más allá de la defensa. Canadá ha reconocido las graves carencias de infraestructuras que comunican sus territorios del norte con el resto del país, vitales tanto ante una eventual ocupación exterior como para la habitabilidad de sus habitantes. La ministra de los Territorios del Noroeste, Caroline Wawzonek, lo resumió con crudeza: “Las

comunidades simplemente luchan por sobrevivir”, [subrayando](#) la escasez de recursos con los que conviven sus habitantes. Así, junto a la modernización de bases militares y la creación de los ‘Northern Operational Support Hubs’ (NOSHs) y ‘Northern Operational Support Nodes’ (NOSNs), la estrategia incluye una mayor conectividad mediante carreteras, puertos y corredores de comunicación en un plan que mira por lo militar y lo civil.

Acciones de Estados Unidos

Por su parte, Washington ha reconocido que no se han abierto conversaciones sobre el despliegue de tropas estadounidenses en la frontera norte canadiense. Lo que sí se [baraja](#) es cómo remediar la debilidad defensiva de Ottawa incluyendo modernización de sistemas de alerta, incremento de operaciones y patrullas conjuntas por tierra y aire, y mayor presencia de patrulleros estadounidenses en el Ártico.

Estados Unidos ha impulsado un programa para no retroceder en su dominio marítimo global. En un [decreto](#) ejecutivo de abril de 2025, Trump pedía volver a poner una mayor atención al sector marítimo y naval. Entre los espacios geográficos destacados el decreto mencionaba el Ártico, donde EEUU quiere asegurar las rutas comerciales y garantizar la prosperidad nacional frente a los desafíos de seguridad de la región, con fórmulas de cooperación que no implican cambios de soberanía.

El Ártico se ha convertido, en definitiva, en un área dentro de la estrategia de Trump. Sus demandas territoriales no prosperarán, pero su retórica ya ha conseguido obligar a Canadá a reorientar de forma urgente su defensa ártica y a Dinamarca a reforzar su presencia en Groenlandia. El resultado previsible no es un cambio de mapa, sino una región con más activos militares y una cooperación impuesta por la presión en lugar del consenso. ●

Puerto Rico recobra valor estratégico para EEUU por el despliegue en el Caribe

Reabre la base de Roosevelt Roads, tras veinte años inactiva, en apoyo de la operación Lanza del Sur, que también utiliza el puerto de Ponce

° La gobernadora, Jennifer González, confía en que la utilidad de la isla impulse la aceptación de Washington de acomodar el deseo de 'estadidad' puertorriqueño.

° El voto por convertirse en el estado 51 de EEUU sigue siendo mayoritario, pero la 'Doctrina Donroe' puede acentuar el querer marcar cierta distancia o procurar la independencia.

° El poco aprecio previo de Trump a Puerto Rico y el sentimiento pacifista de parte de la población restan fuerza centrípeta al plan de dominio sobre la Gran Norteamérica.

MANUELA RECIO

El recobrado interés de Estados Unidos por su inmediato espacio geográfico, en aplicación del denominado Corolario Trump de la Doctrina Monroe (coloquialmente, la 'Doctrina Donroe'), devuelve a Puerto Rico a la estrecha órbita estadounidense. Si hace dos décadas, EEUU cerró su base naval de Roosevelt Roads, en la punta oriental de la isla, al haberse acabado la Guerra Fría, la nueva rivalidad entre potencias y la hegemonía que la Administración Trump quiere ejercer sobre el Hemisferio Occidental otorgan a Puerto Rico un destacado papel estratégico: el de avanzadilla sobre el Caribe y el norte de Suramérica.

En su carrera política, Trump ha mostrado poca empatía hacia la isla. Sin embargo, esta se ha convertido en esencial para el despliegue ordenado por el Comando Sur en operaciones contra el narcotráfico, la presión sobre Venezuela y extracción de Nicolás Maduro y el bloqueo petrolero de Cuba.

Quienes en Puerto Rico vienen defendiendo desde hace décadas que este territorio, que tiene un estatus de Estado Libre Asociado, pase a ser un estado más de la Unión creen que la Doctrina Donroe puede empujar hacia un proceso de 'estadidad'. Puerto Rico se encuentra bajo soberanía estadounidense, pero sin propiamente formar parte de ese país; los puertorriqueños

comparten la nacionalidad, pero no pueden votar al presidente, salvo que vivan en EEUU.

Washington ha sido siempre reactivo a revisar esta situación y con el tiempo han crecido en la isla las voces en favor de mayor autonomía e incluso independencia. Una actitud 'imperial' por parte de Estados Unidos más bien podría incrementar esa tendencia.

Operación militar

Las enseñanzas del almirante Alfred T. Mahan, que fundamentan la conciencia geopolítica de Estados Unidos, apuntaron a la importancia estratégica de los pasos entre el océano Atlántico y el mar Caribe situados justo al este de Cuba y al este de Puerto Rico. La guerra contra España de 1898 permitió a EEUU situar en el primero de esos pasos la base militar de Guantánamo y en el segundo la base de Roosevelt Roads, desde la cual se usaron las cercanas islas de Vieques y Culebra como campo de tiro. Acabado el siglo XX, en la era unipolar de indiscutido liderazgo internacional de EEUU, esas instalaciones militares de Puerto Rico perdieron relevancia y desde 2004 quedaron del todo cerradas (el mayor interés por Guantánamo se debe a que está en la ruta que va de la costa este estadounidense al Canal de Panamá).

Los cambios en el orden mundial operados desde entonces tienen aquí una simbólica manifestación: en medio de la nueva invocación

afectados; Trump luego acusó a las autoridades locales de desviar los fondos de ayuda entregados para pagar la endémica deuda pública. En octubre de 2024, en su segunda campaña presidencial, Trump acogió en un acto electoral a un humorista que se refirió a Puerto Rico como “una [isla de basura](#) en el océano”; el candidato mostró luego su disconformidad con esa afirmación, asegurando que “nadie ama más a los puertorriqueños que yo”.

Debate social

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, del conservador Partido Nuevo Progresista (PNP), accedió al cargo en enero de 2025, al mismo tiempo que Trump, con cuyas políticas se ha identificado, aunque en el pasado le había criticado. González fue especialmente [solicita](#) con el despliegue militar del Comando Sur y la detención de Maduro y considera que la revalorización estratégica de la isla para Washington puede propiciar un proceso de estadidad, de la que es firme defensora.

La oposición, formada por el Partido Popular Democrático (PDP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), e igualmente algunas asociaciones como ‘Madres contra la Guerra’ han expresado su desacuerdo con la ‘remilitarización’ de la isla y su uso como atalaya para lanzar operaciones bélicas —además cerca de la propia isla— sin autorización formal de las instituciones de Puerto Rico. Asimismo, se

destaca que los puertorriqueños no intervienen en las decisiones del Congreso estadounidense, pues solo cuentan con un puesto (con voz y sin voto) en la Cámara de Representantes de Washington. En ese debate social también ha intervenido el alcalde de Ceiba, municipio donde se encuentra Roosevelt Roads, quien por el contrario valora positivamente el impacto económico de la reactivación de la base.

El estilo ‘[neoimperial](#)’ atribuido a la presidencia de Trump, manifestado muy singularmente en la exigencia que hace la revitalizada Doctrina Monroe de dominio sobre el hemisferio occidental —sobre todo en lo que la Administración Trump ha comenzado a llamar Gran América del Norte, que por el sur incluye hasta la línea del ecuador—, choca con una creciente aspiración de la sociedad puertorriqueña. Si bien es verdad que una porción importante de la población preferiría convertirse en un estado más de EEUU, otros sectores advierten de que la singularidad insular de Puerto Rico no está siendo atendida por Washington, ni tampoco lo estaría en ese supuesto. La centenaria Ley Jones determina que solo barcos estadounidenses pueden llevar mercancía y pasajeros de un puerto a otro del país, lo que tiene consecuencias negativas especialmente para Puerto Rico: se trata de un agravio frecuentemente expuesto, pero nunca resuelto. ●

La Doctrina de China para América Latina: Pekín aguanta la mirada a Trump

La potencia asiática refuerza su apuesta por la cooperación y los foros multilaterales frente a la unilateralidad que impone Washington a sus vecinos

° La publicación a finales de 2025 de un nuevo documento chino para la región, días después de oficializarse el ‘Corolario Trump’, habla de competencia de influencias.

° Presión china para que sus socios comerciales no se alineen con Taiwán ante la perspectiva de un conflicto por la isla, pese a la ambigüedad estratégica de EEUU.

° La movilización estadounidense contra infraestructuras gestionadas por empresas chinas no ha inducido a Pekín a ningún plan de desinversión o retirada.

ISABEL BORST

La asertividad de Estados Unidos en su deseo de dominio sobre su entorno geográfico, simbolizado con la operación de captura Nicolás Maduro y la autoridad ejercida sobre Venezuela desde entonces, constituye un riesgo de fricción con otras potencias –Rusia, pero sobre todo China— que también aspiran a ejercer influencia en la región. Aunque la presión estadounidense ha llevado en el último año a que, por ejemplo, los dos principales puertos del Canal de Panamá dejen de estar en manos chinas, Pekín ha querido demostrar que no se deja intimidar y que aguanta la mirada a Trump.

El pasado 10 de diciembre, el gobierno de China publicó un [nuevo](#) ‘white paper’ sobre sus relaciones con Latinoamérica y el Caribe (LAC). Se trata del tercer ‘libro blanco’ que Pekín elabora sobre la región tras los de 2008 y 2016. Más allá de su tono diplomático y extenso contenido, uno de los aspectos más significativos es su fecha de publicación, escasos días después de que Washington divulgara su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en la que el hemisferio occidental ocupa un lugar prioritario, dándose así una percepción de [competición](#) entre ambas potencias. Conforme a esta nueva [estrategia](#), Estados Unidos pretende reafirmar y aplicar “la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”

además de negar a “competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales” en la región.

Aunque en esta concreción de objetivos no se hace referencia explícita a Pekín, se puede inferir que Washington adoptará una postura más firme con respecto a sus intereses geopolíticos, independientemente del origen de las estrategias que puedan surgir en su contra. De igual manera, el documento chino no hace ninguna alusión a los objetivos de Estados Unidos en LAC. Sin embargo, el escaso lapso temporal entre ambos documentos indica que ambas potencias mundiales están a la alerta de las futuras acciones de su rival.

Documentos marco

Latinoamérica ha sido objeto de tres libros blancos impulsados por el gobierno chino en los últimos 16 años. El primero fue publicado en el año 2008, en un contexto internacional marcado por el incremento de las relaciones comerciales. Establecía que la finalidad política [perseguida](#) por Pekín consistía en “construir y desarrollar una asociación integral y cooperativa caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo común”.

El publicado en noviembre de 2016, por su parte, introdujo una nueva visión estratégica al



Foto oficial de los presidentes asistentes al Foro China-CELAC 2025 celebrado en mayo en Pekín [Ricardo Stuckert]

incorporar la estructura “1+3+6”, [fundamentado](#) en tres pilares (comercio, inversión y cooperación financiera) y seis áreas de cooperación (energía, recursos, infraestructuras, manufactura, innovación científica y tecnológica). Muchos analistas consideran esta iniciativa como un ambicioso proyecto que marca un [nuevo giro](#) en la comprensión de Pekín en cuanto a sus relaciones económicas y políticas con terceros países, ya que se consolidó con el Plan de Acción Conjunto China-CELAC para la cooperación en Áreas Prioritarias, lo que cimentó la integración de la región a la BRI (Belt and Road Initiative). De ello se deduce que, con el transcurso del tiempo, Pekín ha ido definiendo su política exterior de manera progresiva, estructurándola en torno a distintos ejes —ya sean diplomáticos o económicos— lo que explica la dimensión alcanzada en su tercer libro blanco.

Siguiendo la misma línea que sus predecesores, el último libro blanco continúa planteando la cooperación política como base de las relaciones entre China y la región. Este tercer documento establece los “Cinco programas para construir una comunidad China-LAC con un futuro compartido”, englobados por los programas de Solidaridad, Desarrollo, Civilización, Paz y Conectividad entre Personas.

De igual manera, uno de los temas más importantes y recurrentes en la política china — el principio de una sola China— se encuentra explícitamente reflejado en esta tercera versión. En efecto, dentro de la sección dedicada al Programa de Solidaridad, se afirma que “el principio de una sola China es el fundamento político y la premisa fundamental para que China desarrolle relaciones diplomáticas con otros países”. Esta frase pone de manifiesto una condición esencial impuesta por Pekín para mantener relaciones diplomáticas con terceros países. Según el documento, China está dispuesta a desarrollar vínculos políticos con los estados LAC, siempre que sea “sobre la base del principio de una sola China”.

Esta posición es de especial interés, ya que en Latinoamérica está la mayoría de los pocos países que siguen manteniendo relaciones diplomáticas formales [con Taiwán](#). En concreto, estas se limitan a siete estados: Belice, Guatemala, Haití, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

El hecho de que Pekín exija el reconocimiento del principio de una sola China como punto de partida para establecer relaciones formales con otros estados reviste gran importancia. En primer lugar, porque constituye

una presión importante para aquellos países latinoamericanos que no reconocen dicho principio, pero que podrían beneficiarse de una cooperación más extensiva con China. En segundo lugar, porque busca [ampliar la esfera](#) de influencia china en la región y, al mismo tiempo, contrarrestar la política exterior seguida por Washington que, a pesar de nominalmente reconocer el principio de una sola China, mantiene una política de [ambigüedad estratégica](#) con respecto a la República de China que deja abierta la posibilidad de una futura intervención norteamericana en defensa de Taipéi.

En conjunto, puede afirmarse que Pekín pretende conservar una línea de continuidad entre sus tres papeles blancos dirigidos a América Latina y el Caribe, reflejando una visión de política exterior que se ha ido desarrollando durante décadas. Aunque este enfoque no es de naturaleza disruptiva, el tercer papel blanco ofrece una posición conflictiva con la de Washington, lo que sugiere que el escenario político regional podría verse envuelto en un conflicto de intereses prolongado entre ambas superpotencias.

Cooperación multilateral

Para comprender la evolución de las relaciones políticas y comerciales entre China y la LAC, es preciso analizar sus fundamentos y orígenes. Más específicamente, se debe partir de la postura no intervencionista a la que Pekín siempre se ha adherido con respecto a los estados latinoamericanos. En efecto, ante las continuas intervenciones militares conducidas por Washington (se estima que, durante el transcurso de los últimos 250 años, el 34% de dichas campañas militares se han dirigido a países de la LAC), muchos estados latinoamericanos han buscado fomentar forjar una cooperación regional que les permita actuar con mayor autonomía. De ahí la creación de organizaciones como UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) o la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), dirigidos a resistir la poderosa influencia de países como Estados Unidos. Dado este contexto geopolítico, la postura de China representaba una alternativa [menos intervencionista](#) y más abierta a un modelo de cooperación internacional basado

en el intercambio y el beneficio mutuo. Se trata de una cooperación menos marcada por una geopolítica realista y más por una visión liberal de interdependencia como motor que solidifica las relaciones bilaterales y multilaterales entre estados.

Desde una perspectiva económica, la República Popular de China ha adquirido una presencia significativa en las economías de los países latinoamericanos desde comienzos de siglo. China se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de América Latina (es el primero de Sudamérica) y en un selectivo inversor: si bien en IED queda lejos de EEUU y de la UE, ha apostado por los recursos energéticos, la minería y la agricultura, ha ido penetrando en el sector de las infraestructuras, en un [proceso](#) evolutivo.

No obstante, el impacto económico de China en la región ha generado preocupación, tanto porque si bien ha potenciado las exportaciones latinoamericanas, también las ha [reprimarizado](#) (los países han sido reducidos a exportadores de materias primas, sin avanzar hacia la exportación de productos con valor añadido), como por los riesgos de la llamada ‘trampa de la deuda’ (una situación de dependencia económica en la que el país acreedor puede dictar las reglas del juego a los países deudores, haciéndose con el control de infraestructuras críticas, por ejemplo).

Entre 2013 y 2021 China concedió más de 145.000 millones de dólares en [préstamos](#) a los países latinoamericanos, la comunidad académica se encuentra dividida. Algunos perciben a China como un acreedor relativamente nuevo en la esfera geopolítica mundial, haciéndolo más susceptible de prestar sus fondos ineficientemente debido a su falta de experiencia. Otros académicos, sin embargo, interpretan la política económica china como un mecanismo deliberado de expansión de [influencia](#).

Independientemente de los motivos fundamentales que mueven a China para prestar tales sumas de dinero, no hay duda de que varios países de la región se ven endeudados con Pekín por notables cuantías. En efecto, se ha estimado de que América Latina cuenta con el nivel más elevado de pagos de servicio de la deuda — cerca del 4% del PIB regional— una cifra que



Infraestructura espacial terrestre de China en Sudamérica, según el Congreso de EEUU

supera al de África o Asia. Si se atiende a la cantidad exacta de dichas deudas de manera individual, es perceptible cómo las relaciones entre China y los países latinoamericanos presentan un marcado tono de subordinación económica. Se estima que [Venezuela](#) tiene una deuda con China de entre 8.000 y 13.000 millones de dólares, y [Ecuador](#), de unos 2.500 millones.

Colaboración espacial y cableado

Uno de los aspectos estratégicos del libro blanco chino que Washington mira con mayor susceptibilidad es el relativo a la colaboración aeroespacial que Pekín propone a los países latinoamericanos y a la que el documento dedica un epígrafe. China anima a sus interlocutores a usar el sistema de navegación satelital BeiDou y a servir de base para sus comunicaciones satelitales.

Precisamente, el Congreso estadounidense presentó el pasado mes de febrero un [informe](#) en el que advierte sobre los radares chinos existentes en Sudamérica, operados en última instancia bajo órdenes del Ejército de Liberación chino. Las autoridades de EEUU también han presionado contra el proyecto de un cable submarino directo para transmisión de datos y telecomunicaciones entre Valparaíso y Hong-Kong que el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, [paralizó](#) en marzo al llegar al cargo.

Este intento de bloqueo de Washington al avance económico y tecnológico de China en el hemisferio occidental no está siendo acogido en Pekín con ningún plan de repliegue de inversiones, sino que China está intentando actuar con contundencia para responder a maniobras como la desposesión de los puertos del Canal de Panamá o la pugna reputacional de EEUU en torno el gran puerto peruano de [Chancay](#). ●

La ‘extracción’ de Maduro no libera a Venezuela del régimen autoritario

Transición simulada en Venezuela: la Ley de Amnistía no ha cumplido las expectativas generadas entre la mayor parte de la población

° Un análisis de la norma para la liberación de presos políticos permite concluir que no ha sido más que un instrumento de gestión política de carácter discrecional.

° El Gobierno ha dado por concluido el proceso de puesta en libertad de presos políticos, pero Foro Penal asegura que a finales de abril siguen existiendo 454 en prisión.

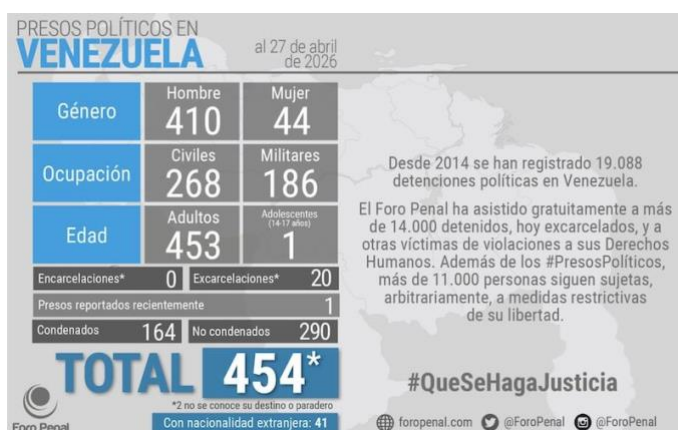
° La maquinaria represiva persiste en el país: gran parte de la arquitectura legal y orgánica del modelo precedente permanece inalterada.

MARÍA NÚÑEZ

Tras la operación ‘Resolución absoluta’ del pasado 3 de enero, en la que tropas estadounidenses, neutralizadas las defensas venezolanas, aprehendieron a Nicolás Maduro y su esposa para ser juzgados en Nueva York, quien entonces figuraba como vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, cogió las riendas del poder. Sin legitimidad electoral y en última instancia sostenido por la Administración Trump, el nuevo gobierno se comprometió con un proceso de transición hacia la paz social, la convivencia democrática y la reconciliación nacional, dejando atrás los años autoritarios del chavismo/madurismo.

Sin embargo, después se ha cuestionado si verdaderamente se ha abierto un proceso real de cambio, o por el contrario estamos meramente ante una transición simulada bajo el mismo régimen, pero liderado por una distinta cabeza. Uno de los cambios políticos más destacados fue la promulgación de una ley de amnistía, que funciona en muchos contextos como instrumento clave para la superación de conflictos, impulsando una transición pacífica.

Así, examinar el carácter y aplicación de la [Ley de Amnistía](#) para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero de 2026, podría ofrecer



Cartel de la ONG Foro Penal con el número de presos políticos que la organización estimaba a 27 de abril de 2026

ciertos indicios del deseo de la materialización del verdadero cambio y de la nueva perspectiva de reconciliación que lidera el gobierno interino de Delcy Rodríguez. El 23 de abril, Rodríguez dio por concluido el proceso abierto con la ley y anunció el paso a un nuevo estadio: la reforma de la Justicia penal. Aseguró que, del alrededor de 12.000 solicitudes recibidas, 8.616 personas se habían beneficiado de la ley, recuperando la libertad plena. Sin embargo, entidades civiles cuestionan tanto la plenitud de la libertad recuperada, en el caso de muchos excarcelados, como las cifras mismas. Foro Penal, una de esas organizaciones, estimaba que a finales de abril seguían existiendo 454 presos políticos.

La Ley de Amnistía

Aunque ciertamente la Ley de Amnistía ha supuesto la liberación de numerosos presos políticos injustamente encarcelados, conviene destacar ciertos rasgos de la normativa que permiten concluir que no ha sido más que un instrumento de gestión política de carácter discrecional.

A continuación, se presenta el análisis de los aspectos claves de la ley, a partir del examen realizado por distintos organismos especializados venezolanos —como [Foro Penal y Justicia Encuentro y Perdón](#) (JEP)— junto con instancias internacionales, principalmente, [la Misión](#) de Determinación de los Hechos de la ONU (en adelante, la Misión) y [Human Rights Watch](#).

ASPECTOS POSITIVOS

- El artículo 4 dispone que es de orden público.
- El artículo 5 establece el principio de favorabilidad.
- El artículo 7 permite que personas en el exterior puedan solicitar la amnistía mediante un abogado y establece que no serán detenidas al ingresar al país.
- Establece procedimientos con plazos y recursos.
- Beneficia a un grupo relevante, aunque limitado, de presos y perseguidos políticos.
- Ha permitido la liberación de numerosos presos políticos.

ASPECTOS NEGATIVOS

- La ley fue adoptada en un plazo acelerado, lo que impidió un proceso transparente y consultivo.
- El alcance de la ley es restrictivo, limitándose a delitos (no ilícitos civiles, disciplinarios, administrativos y otros) y una lista acotada de acontecimientos.
 - o Formalmente abarca desde 1999 hasta 2026, pero en la práctica solo cubre períodos limitados a aproximadamente 20 meses de casi 28 años de persecución.
 - o Excluye delitos comúnmente utilizados en imputaciones políticas y de carácter muchas veces arbitrario, pues su interpretación puede prestarse a interpretaciones discrecionales. Ejemplo de ello es el artículo 9, que excluye a quienes pueden ser vinculados por acciones armadas o de fuerza contra la República.

- Para quienes están fuera del país, la Ley no garantiza que la amnistía sea otorgada antes de la comparecencia personal ante el tribunal; si es negada, la persona queda sujeta al proceso penal pendiente, lo que genera un riesgo real.
- Su aplicación queda en manos de los mismos órganos que han ejecutado la persecución.
- No queda claro si la ley de amnistía podría extenderse a los agentes del Estado, lo que la convertiría en un mecanismo de impunidad.
- La ley no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de Derechos humanos, ni la inocencia de los sujetos o la arbitrariedad de los procesos.
- Tampoco se hace mención a las víctimas de la represión, sin derecho a una reparación efectiva.
- No contempla procesos transparentes e integrales, investigaciones independientes, ni mecanismos de búsqueda de la verdad.

Además de los puntos negativos que surgen del tenor literal de la ley, su ejecución ha puesto de manifiesto otra serie de inconvenientes. Primeramente, muchos aspirantes a ser amnistiados se han encontrado con ciertos obstáculos en la tramitación de sus solicitudes de amnistía, tales como el rechazo de los tribunales de escritos bien por supuestos errores de forma, bien por falta de competencia, o ser presentados por la defensa (pese al carácter de orden público de la ley). Estas denegaciones sistemáticas constituyen así exclusiones injustificadas a civiles y militares que claramente cumplen los criterios establecidos. Más aún, algunas organizaciones como Foro Penal, [denuncian](#) que ciertos tribunales se han negado a entregar la copia de las resoluciones denegatorias, impidiendo con ello que las personas puedan apelar su caso.

En segundo lugar, las autoridades [afirman](#) que un total de 8.616 han sido liberadas incondicionalmente al amparo de la ley. Sin embargo, el gobierno deniega la solicitud de ciertas organizaciones de la lista oficial de los beneficiarios. Lo cierto es que no existen registros públicos oficiales de estas causas, y por ello estas cifras no pueden ser corroboradas efectivamente. En consecuencia, estimar el número de personas excarceladas es complicado, máxime si no conocíamos de partida la cifra de las encarceladas, no habiendo datos ciertos y únicos sobre la identidad y el número de presos

políticos. A esto se le suma la negativa sistemática del gobierno a permitir que dichas organizaciones accedan a los centros de detención, restringiendo severamente su labor. Este hermetismo socava la transparencia del proceso, que se realiza a puerta cerrada, poniendo en entredicho la veracidad de la prometida transición.

Tercero, varias organizaciones, especialmente JEP, [denuncian](#) en el ámbito técnico-procesal una subversión de la jerarquía normativa: la aplicación de la dicha ley de amnistía absorbe y renombra libertades obligatorias positivizadas en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), transformando una obligación legal en un acto de gracia política. Efectivamente, los artículos [230](#) y [231](#) del COPP obligarían a la liberación inmediata de más de 300 personas, debido al vencimiento o aplicación desproporcional de las medidas de coerción personal y por razones humanitarias vinculadas a estados de salud crítica (arts. 230 y 231 COPP, respectivamente).

Finalmente, cabe recordar que cientos de venezolanos siguen injustamente privados de su libertad. Entre ellos, personas con discapacidad y graves problemas de salud, personas mayores y algún menor de edad. Además, pese a ser motivo de celebración las liberaciones permitidas por este instrumento legal, muchas de las personas excarceladas siguen bajo investigación penal, permanecen bajo medidas restrictivas de su libertad (algunas han sido trasladadas a [arresto domiciliario](#)) o sin que sus derechos hayan sido plenamente restituidos.

La apariencia de transición

Aunque Nicolás Maduro ya no se encuentra al frente del poder y se han producido algunos cambios de personas en lugares destacados de mando, el aparato represivo sigue aún intacto, lo que obstaculiza el proceso real de cambio venezolano. Persisten aún la represión, la desconfianza institucional y la opacidad judicial.

Debido a las razones señaladas, la Ley de Amnistía por sí sola ha sido incapaz de constituir una herramienta efectiva como punto de inflexión del proceso de reforma del país. No solo esto, sino que las personas beneficiarias de la amnistía siguen bajo las mismas leyes e instituciones que sirvieron de base para su encarcelación. En la misma línea, el [anunciado](#)

cierre del Helicoide es insuficiente para poner fin a la comisión de graves violaciones de derechos humanos, debido a que se han registrado por organizaciones locales detenciones por motivos políticos en otras instalaciones distribuidas por el territorio, así como la existencia de evidencia de centros de detención clandestinos que operan fuera de todo marco legal. Ambos ‘cambios’ más bien son una especie de espejismo político o jurídico, que buscan aminorar la presión global y restaurar su estatus en la comunidad internacional, dando una imagen de transición y reforma, cuando no es más que una estrategia de legitimación.

Además es preciso agregar que incluso después de comenzar la ‘nueva etapa’ en la historia de Venezuela, el gobierno venezolano ha seguido siendo protagonista de violaciones de derechos humanos, poniendo de relieve que dicha maquinaria represiva legal e institucional sigue operativa. La misma se manifiesta, además de en las ya mencionadas privaciones de libertad pendientes de ser levantadas, en la persistente restricción del espacio cívico y democrático.

Ejemplo de ello son las 87 detenciones realizadas apenas comenzar el mandato el gobierno interino, debido a la celebración de la detención de Maduro o a la negación de los funcionarios a falsear la evidencia relacionada con el ataque militar del 3 de enero. Las organizaciones de la sociedad civil, los pocos medios independientes que aún existen y los actores políticos disidentes son aún objeto de ataques, intimidación, persecución y criminalización. Al respecto cabe destacar las crecientes tensiones del gobierno venezolano con estas instancias locales e internacionales, tildadas por el [Ministro del Interior como “mafiosas” y “extorsionadoras”](#). Bajo este discurso descalificatorio el ejecutivo establece ciertos límites y restricciones a las acciones de las mismas, no permitiendo una plena investigación de las sistemáticas detenciones arbitrarias o la supervisión del proceso de liberación, como se ha mencionado anteriormente. Asimismo, todavía persiste el miedo y la desconfianza a las instituciones venezolanas como rasgos estructurales, reflejado en casos de abstención de familiares a denunciar detenciones por temor a represalias, tal como recoge la Misión de la ONU.

La maquinaria represiva que persiste

Este escenario persistirá en Venezuela mientras la arquitectura legal y orgánica del modelo precedente permanezca inalterada. Es imperativo desmantelar el engranaje autoritario heredado, pues resulta imposible levantar un nuevo sistema democrático sobre bases que se oponen a él.

Varias sociedades civiles han denunciado la redacción de leyes y la composición de instituciones que todavía suponen obstáculos insalvables para la transición y que socavan los derechos humanos del pueblo venezolano.

Debajo de estas líneas se exponen los rasgos estructurales más significativos que aún presentan los cinco poderes de Venezuela y que, en su conjunto, mantienen operativo el aparato autoritario.

Sin un cambio más profundo y duradero la ciudadanía no puede confiar en que los años de represión y violencia han llegado a su fin. De lo contrario, estaríamos más bien ante una transición simulada, que sirve a los intereses del gobierno de Venezuela, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano. ●

PODER EJECUTIVO

La declaración de las autoridades del estado de emergencia sirve como pretexto para tomar medidas intrusivas y afianzar la maquinaria de la represión.

Varios funcionarios gubernamentales y militares de alto nivel responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ejerciendo altos cargos en el ejecutivo y en las fuerzas de seguridad.

PODER LEGISLATIVO

Siguen vigentes diferentes leyes que permiten violaciones de derechos humanos:

- La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales de 2024, que otorga al gobierno amplios poderes para regular el funcionamiento y el financiamiento de organizaciones no gubernamentales y establece motivos vagos y ambiguos para disolverlas. Sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar de forma segura y libre, y debe ser derogada.
- La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela de 2024, que penaliza cualquier crítica a las autoridades o la defensa de sanciones contra Venezuela o contra sus funcionarios. Los infractores se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, que impone penas de 10 a 20 años a cualquiera que “promueva, fomente o incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia” y que se ha utilizado para detener a críticos bajo delitos ampliamente definidos. Se utiliza para reprimir la disidencia.
- La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo de 2012, que se ha utilizado para enjuiciar a opositores políticos, manifestantes y ciudadanos extranjeros, entre otros, por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, con penas que van de 25 a 30 años.
- La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004, modificada en 2010, que se ha utilizado para restringir la libertad de expresión y de prensa, y para censurar y cerrar medios de comunicación.

PODER JUDICIAL

En 2004 dejó de ser un poder independiente del gobierno en 2004, cuando el presidente Hugo Chávez aprobó una reforma judicial y cooptó el Tribunal Supremo de Justicia. Desde entonces la Corte ha apoyado al poder ejecutivo en la represión de los críticos, siendo la falta de independencia de los magistrados, jueces y fiscales garantía de impunidad de los delitos cometidos por los oficiales.

PODER ELECTORAL

Los miembros del Consejo Nacional Electoral tomaron una serie de medidas para impedir el registro de candidatos de la oposición en las elecciones pasadas.

PODER POPULAR

Falta de transparencia y participación ciudadana en la designación de titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.

El Comité de Evaluación de Postulaciones (encargado de la selección) está integrado únicamente por diputados en funciones, y no por representantes de diversos sectores de la sociedad, como exigen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, comprometiendo su independencia e imparcialidad. El procedimiento de elección de los titulares actualmente carece además de transparencia, porque ha avanzado sin publicación de reglamento, cronograma ni el baremo de evaluación. Esto restringe la participación informada de la ciudadanía, debilitando la legitimidad del proceso.

Haití avanza hacia elecciones en medio de violencia de pandillas que la ONU no logra atajar

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2025 una nueva iniciativa internacional, bautizada como Fuerza de Represión de las Bandas

° La iniciativa, impulsada por EEUU, afronta la realidad de que amplias zonas están en manos de grupos armados; El 90% de la capital se ve controlada por pandillas criminales.

° El fracaso de la 'misión de paz' creada en 2023 ha llevado a cambiar el propósito de la fuerza expedicionaria: no es asegurar la paz del país sino combatir directamente las bandas.

° Durante el nuevo mandato, en principio de un año, deberían celebrarse las elecciones de agosto, con segunda vuelta en diciembre, y formarse un nuevo gobierno.

CAMILA CHAME

Haití intenta superar su condición de estado fallido en un doble esfuerzo: restituir la institucionalidad mediante elecciones —las primeras en más de una década— y recuperar el control territorial con una reformulación de la lucha contra las bandas criminales que se han adueñado del país. Sin una autoridad legitimada es difícil el segundo propósito, pero con extrema violencia en las calles no puede haber elecciones fiables que permitan el primero. A finales de 2025 la ONU aprobó una nueva misión internacional de seguridad, con mandato de un año durante el cual deberían celebrarse las elecciones de agosto (con segunda vuelta en diciembre) y formarse un nuevo gobierno. No hay garantía de éxito.

Haití entra en 2026 en una situación que trasciende una crisis política tradicional. El país enfrenta un debilitamiento prolongado de sus instituciones que ha puesto en duda su capacidad para ejercer soberanía efectiva sobre su territorio. Durante décadas, factores como la pobreza estructural, la dependencia económica externa, los desastres naturales y la inestabilidad política han eliminado el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en los últimos años estos problemas se han acumulado hasta generar una situación en la que Haití es considerado un estado fallido.

El vacío de autoridad se ha convertido hoy en parte de la normalidad. En amplias zonas, especialmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, el gobierno no ejerce control real y el poder está en manos de grupos armados. El [90%](#) de la capital se ve controlada por pandillas criminales. La población vive bajo un régimen marcado por la violencia, el desplazamiento interno y la falta de servicios básicos. En este sentido, la crisis haitiana no es solo un problema de gobernabilidad, sino una crisis de soberanía, en la que el Estado mantiene reconocimiento internacional, pero ha perdido capacidad efectiva para gobernar.

El [asesinato](#) del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó un punto de no retorno. Aunque Haití ya era un Estado frágil, su muerte incrementó la inestabilidad política y dejó al país sin una autoridad clara. Desde entonces, los gobiernos de transición han tenido dificultades para consolidar el poder, organizar elecciones creíbles o recuperar el control territorial. La falta de instituciones fuertes y la debilidad de las fuerzas de la policía nacional han impedido establecer un orden estable.

Los indicadores internacionales reflejan este deterioro. Haití se encuentra entre los Estados más frágiles del mundo y su economía lleva varios años en declive. El Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra en evolución negativa desde los últimos diez años), mientras que gran

parte de la actividad económica proviene de remesas y no del sistema interno. Desde el punto de vista teórico, el modelo de Estado moderno —basado en el monopolio legítimo de la fuerza y el control del territorio— solo se cumple parcialmente en el caso haitiano.

Las bandas armadas

Uno de los elementos más visibles de la crisis es el aumento del poder de las bandas armadas. Aunque estos grupos han existido durante años, su influencia ha crecido significativamente en los últimos años. Controlan gran parte de la capital y varias rutas estratégicas, lo que les permite intervenir en la economía y en la vida cotidiana de la población. El dominio va más allá de la capital, ya que también tienen control en el departamento de Artibonito y el área de la comuna de Cabaret.

Algunas alianzas entre bandas han alcanzado un nivel de organización que supera el de simples grupos criminales. La alianza conocida como [Viv Ansanm](#), liderada por Jimmy ‘Barbacoa’ Chérizier, refleja este cambio radical. Estos grupos combinan actividades criminales con discursos políticos que apelan a la exclusión social y al abandono histórico del Estado. Han sabido manipular la narrativa a su favor. En barrios donde el gobierno nunca ha ofrecido servicios básicos, este tipo de discurso suele generar cierto apoyo.

En la práctica, las bandas han asumido funciones propias del Estado. Controlan el transporte de mercancías, regulan el acceso al combustible, cobran peajes ilegales y, en algunos casos, gestionan servicios esenciales de manera ilegal. El control completo de infraestructuras estratégicas, como puertos o centros de distribución, les permite influir directamente en la economía nacional.

Esta situación ha dado lugar a una soberanía fragmentada. Haití sigue siendo reconocido como Estado, pero el control real está dividido entre distintos actores. La Policía Nacional, debilitada por la falta de recursos y personal, apenas puede proteger algunos edificios oficiales. Para 2026, se estima que más de 1,1 millones de personas viven bajo administración directa de las bandas. Haití es un caso peculiar porque las bandas no evaden al Estado, sino más bien hay una sustitución de soberanía donde reemplazan al Estado en seguridad y orden económico

Misiones Internacionales

Ante el aumento de la violencia, la comunidad internacional ha intentado intervenir para evitar un colapso total. En 2023 en el marco de la ONU, se creó la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), con el fin de respaldar la labor de la policía haitiana, pero sus [resultados](#) fueron limitados debido a la falta



El líder de una banda criminal, Jimmy ‘Barbacoa’ Chérizier, patrulla una calle de Puerto Príncipe [Amnistía Int.]

de recursos y a la debilidad de las instituciones locales.

Con un cambio de formulación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una nueva iniciativa en septiembre de 2025, la [Fuerza de Represión de las Bandas](#) (GSF). A diferencia de la anterior, no es una «misión de paz» de la ONU, ya que no su cometido no es asegurar la paz del país sino combatir directamente las bandas. Con un mandato de 12 meses y aprobada por impulso de Estados Unidos, esta fuerza de 5.550 efectivos tiene el propósito de colaborar con las autoridades haitianas para neutralizar a las pandillas, proteger las infraestructuras y facilitar el acceso humanitario.

Sin embargo, la intervención enfrenta grandes dificultades. Además, existe desconfianza hacia la presencia extranjera debido a experiencias anteriores que no lograron resolver los problemas de fondo. Por esta razón, la intervención internacional puede reducir la violencia en el corto plazo, pero no garantiza estabilidad a largo plazo sin reformas internas.

Elecciones y problema de legitimidad

Con la confianza en que al menos parte de la violencia pueda mitigarse en los próximos meses, el país avanza hacia la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y locales. Fueron aprobadas por el consejo presidencial de transición (CPT) de Haití, órgano que ha dirigido el país en los últimos dos años y que el pasado mes de febrero, reconociendo su incapacidad para seguir gestionando la situación, resultó disuelto, [pasando el poder](#) al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, respaldado por Washington.

Las elecciones están previstas para el 30 de agosto, con una segunda vuelta el 6 de diciembre en el caso de las presidenciales. En las últimas semanas se ha inscrito unos 280 partidos políticos y coaliciones para esos comicios. La celebración de las elecciones — las primeras presidenciales desde 2016—, no está asegurada, sin embargo.

Haití no tiene un censo electoral confiable ya que existe más de medio millón de personas desplazadas y la participación en las últimas elecciones fue meramente de un 21%. Con el nivel de terror actual, cualquier elección corre el riesgo de ser sabotada por las bandas criminales. Además, celebrar elecciones en un territorio ocupado por paramilitares no restaura la legitimidad, solo creará un gobierno sin capacidad de mando real continuando su maldición de legitimidad sin soberanía. Todo dependerá de si el nuevo mandato de GSG logra controlar la violencia.

Dependencia económica

La crisis política se combina con una economía extremadamente frágil. Haití depende en gran medida de la ayuda internacional y de las remesas enviadas desde el extranjero, que suponen el 16% del PIB. Estos recursos son esenciales para la supervivencia de millones de personas y representan una parte importante del ingreso nacional. Esta dependencia limita la autonomía del país y aumenta la influencia de actores externos en la toma de decisiones. En la práctica, Haití funciona como un Estado asistido, cuya estabilidad depende de recursos que no controla completamente.

¿Soberanía o protectorado permanente?

La cuestión de si Haití puede volver a ser una nación soberana es una de muchas dimensiones. Sin la ayuda de capital externo y la seguridad importada, el país caerá en una hambruna masiva; actualmente hay millones de personas en inseguridad alimentaria aguda.

La brecha de desigualdad es una de las más altas del mundo; la élite económica controla la importación de bienes básicos, manteniendo una relación simbiótica y tensa con las pandillas. Haití se encamina a ser un estado tutelado de forma permanente. No es una crisis temporal, sino una condición crónica donde la soberanía es un lujo que el país no puede pagar. El éxito no se medirá en democracia, sino en si el sistema internacional logra evitar que Haití colapse por completo. ●

Noboa y Petro se acusan de la inseguridad en la frontera entre los dos países

Ecuador volvió a batir en 2025 el récord en su tasa de homicidios, a pesar de la guerra abierta contra el crimen organizado

° El presidente ecuatoriano acusa a su homólogo de desatender la seguridad fronteriza; el colombiano responde que el Ejército vecino ha bombardeado su territorio.

° *En respuesta, Noboa ha escalado los aranceles a los productos de Colombia hasta el 100%; Petro los ha igualado y además ha suspendido la exportación de electricidad.*

° *Es la primera vez que desacuerdos sobre la gestión del crimen trasfronterizo han derivado en castigos económicos, contra las normas de la Comunidad Andina de Naciones.*

NICOLÁS ESTÉVEZ

Tras la llegada de Daniel Noboa a la presidencia de Ecuador, las discrepancias con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, han sido constantes. La más reciente —una tensión sostenida por la seguridad fronteriza y el crimen transnacional— ha derivado en una confrontación comercial sin precedentes entre los dos países. Aunque la relación entre Bogotá y Quito se ha caracterizado tradicionalmente por primar la cooperación y el desarrollo conjunto, no es la primera vez que la agenda de seguridad ha fracturado la relación. En esta ocasión, sin embargo, las medidas tomadas por ambos países amenazan no solo con destruir décadas de acuerdos comerciales, sino agravar la deficiencia energética de Ecuador.

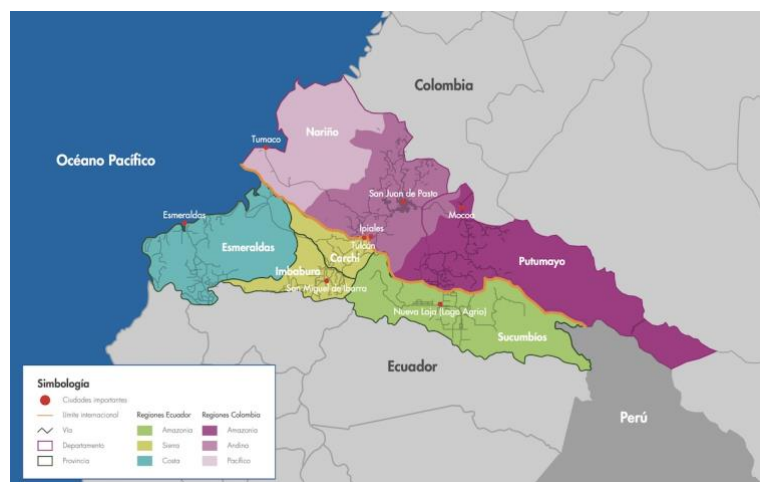
La frontera entre los dos vecinos ha estado plagada de grupos armados a lo largo de los años; de hecho, los dos países llegaron a momentos de tensión militar durante las presidencias de Álvaro Uribe y Rafael Correa, cuando tropas colombianas atacaron un campamento de las FARC instalado en suelo ecuatoriano. Pasado aquel periodo, la relación tendió a normalizarse, pero el acuerdo de paz colombiano de 2016 hizo que disidentes de las FARC y otros grupos penetraran con más frecuencia en el otro país, especialmente cuando los transportes de droga comenzaron a buscar la salida por puertos ecuatorianos. Esto derivó en

un contagio del problema del narcotráfico, con la potenciación de grupos criminales autóctonos y el rápido deterioro de la seguridad ciudadana en Ecuador.

En lo que va de esta década, Ecuador ha pasado de ser un lugar de tránsito a convertirse en un centro estratégico logístico para el acopio y exportación de narcóticos procedentes de Colombia. Según la organización de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED en inglés), la situación para Ecuador probablemente vaya a empeorar este año.

Aumento de la violencia

Ecuador se posiciona actualmente como [el país con la mayor tasa de homicidios](#) de Latinoamérica. Esa tasa pasó de 7,8 a 45,7



asesinatos por cada cien mil habitantes entre 2020 y 2023, una cifra que el informe de las [Naciones Unidas](#) de 2025 sobre homicidios atribuye a violencia vinculada al tráfico de cocaína y presencia de pandillas en regiones del país. En 2024 la tasa descendió ligeramente, a 38,8 asesinatos por cien mil habitantes, pero en 2025 se alcanzó [un récord](#) de 50,9. ACLED estima que el 71% de los habitantes se ha visto expuesto a la escalada de la violencia, llevando a un considerable aumento en desplazamiento interno y abandono del país.

Las cifras no dan tregua y eso que Noboa se ha embarcado en una guerra contra el crimen organizado, incluso con la estrecha [cooperación militar](#) de Estados Unidos. El presidente ecuatoriano acusó a Petro a finales de enero de [“abandonar”](#) la frontera, al haber retirado tropas colombianas destacadas allí. A mediados de marzo, Petro acusó a Noboa de haber autorizado un [bombardeo](#) de su Ejército en suelo colombiano, a raíz de la explosión de una bomba que, según se determinaría después, cayó de modo accidental, sin provocar heridos. A final de abril Noboa volvió a la carga, acusando a su contraparte de impulsar una supuesta [incursión](#) de guerrilleros en Ecuador. Se trata de un careo, sostenido básicamente en redes sociales, que no parece que vaya a terminar, al menos hasta que Petro deje la presidencia en agosto.

Repercusiones económicas y energéticas

Si esta discordia es verbal, sus consecuencias se han trasladado a la economía y a la energía y afectan directamente a los ciudadanos. Noboa fijó en enero aranceles del 30% para la importación de productos colombianos; subió el recargo al 50% en febrero y luego lo dobló para llegar al 100%. Se ha felicitado de que con ello la relación comercial entre ambos países haya pasado de déficit a superávit para Ecuador, pero eso obvia el efecto del encarecimiento de las compras.

Petro ha respondido cada vez igualando la apuesta, castigando de igual modo la llegada de insumos ecuatorianos a Colombia. Pero además ha aplicado otras dos medidas: llevar el caso a los órganos judiciales de la Comunidad Andina (CAN), esperando que se rechacen unas acciones que van contra el libre mercado en la región, y suspender la exportación de electricidad al vecino del sur.

Aunque la decisión desde Bogotá de suspender el suministro eléctrico se justificó en la necesidad de priorizar el [abastecimiento interno](#) debido a la variabilidad climática, la medida ha sido interpretada internacionalmente como una represalia política. La narrativa de ‘necesidad interna’ resulta inconsistente con el historial reciente; incluso durante las fuertes sequías por el fenómeno del Niño de 2023 y



Soldados ecuatorianos en un control junto a la frontera con Colombia en la región andina [Ejército de Ecuador]

2024, Colombia mantuvo la exportación de electricidad a Ecuador. Para el sector empresarial energético en Colombia, esta suspensión del suministro representa una gran pérdida económica, considerando que en 2024 se obtuvo un ingreso por [US\\$ 329 millones](#) en ventas de energía a Ecuador.

Es importante tener en cuenta que el sistema eléctrico de Ecuador ha mantenido un constante déficit en la producción energética, en especial en [tiempos de sequía](#), por lo cual han sido considerablemente dependientes del suministro desde Colombia para aliviar la presión sobre el sistema ante un riesgo de apagones o racionamiento. La ministra de Ambiente y energía en Ecuador argumentaba, días antes de los aranceles, que el sistema estaba [reduciendo el déficit](#) y se alejaba del riesgo de

desabastecimiento. Ahora, sin la compra de energía a Colombia, que representaba casi un [12% de la demanda](#) del país, es muy probable que dificultades energéticas ecuatorianas se agudicen.

Es la primera vez en que estas medidas restrictivas económicas se han utilizado de manera coercitiva en la región y suponen un golpe considerable para los comerciantes en la zona fronteriza, en especial a los productores agrícolas e industrias dependientes del comercio binacional. Es indudable que la seguridad en la frontera y en ambos países requiere de una cooperación y alineación de políticas en la lucha contra las drogas y el crimen transnacional, pero no es del todo claro ni viable que las medidas tomadas desde Quito sean proporcionales ni coherentes a las necesidades. ●



Universidad
de Navarra



CENTER FOR
**GLOBAL
AFFAIRS**
STRATEGIC STUDIES